

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en el artículo 6, número 3, del Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, que ha sido admitido a un solo efecto, por lo que procede el cumplimiento de la mencionada sentencia, sin perjuicio de los efectos revocatorios que, en su caso, puedan derivarse de la estimación de la apelación interpuesta.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 2 de octubre de 1991.-P. D., el Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

26417 ORDEN de 8 de octubre de 1991 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 283/1986, promovido por don José Luis García de Vicuña, contra Resolución de la Subsecretaría del Departamento, de fecha 29 de diciembre de 1984, confirmada en reposición por la de 20 de julio de 1987.

En el recurso contencioso-administrativo número 283/1986, interpuesto por don José Luis García de Vicuña, contra Resolución de la Subsecretaría de este Departamento, de fecha 29 de diciembre de 1984, confirmada en reposición por la de 20 de julio de 1987, sobre jubilación forzosa, se ha dictado, con fecha 5 de marzo de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto por don José Luis García de Vicuña contra Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía, de 29 de diciembre de 1984, confirmada en reposición por la de 20 de julio de 1987, que declaró la jubilación forzosa por edad del recurrente, debemos anular y anulamos esta segunda, sólo en cuanto que, denegando la indemnización solicitada en el recurso de reposición, no declaró la Subsecretaría su propia incompetencia para conocer de dicha pretensión, por corresponder su resolución al Consejo de Ministros, ante el cual puede el recurrente deducir su petición que, en consecuencia, queda imprejuizada por este Tribunal; confirmando en lo demás las resoluciones impugnadas; sin imposición de costas procesales. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que traslado a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1991.-El Ministro, P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991, «Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio), el Subsecretario, Mariano Casado González.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

26418 ORDEN de 17 de octubre de 1991, sobre renuncia de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Cardona U, V, X e Y, situados en la provincia de Gerona.

Los permisos de investigación de hidrocarburos, denominados Cardona U, V, X e Y, fueron otorgados por Real Decreto 2405/1981, de 19 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). Sus titulares «Repsol Exploración, Sociedad Anónima» (REPSOL); «Unión Texas España, Inc.», sucursal en España (UTE) y «Ercros, Sociedad Anónima» (ERCROS) han solicitado la renuncia de los mismos al finalizar su primera prórroga.

Tramitado el expediente de renuncia de los mencionados permisos por la Dirección General de la Energía, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se declaran extinguidos por renuncia de sus titulares los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Cardona U, V, X e Y, cuyos titulares son «Repsol Exploración, Sociedad Anónima» (REPSOL); Unión Texas España, Inc., sucursal en España (UTE) y «Ercros, Sociedad Anónima» (ERCROS) y cuya superficie viene delimitada en la Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se otorgó la primera prórroga.

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley en vigor, el área extinguida revierte al Estado y adquirirá la condición de franca y registrable a los seis meses de la fecha de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», si el Estado no hubiera ejercido antes la facultad que le confiere el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento vigente, de asumir su investigación por sí mismo, o sacar su adjudicación a concurso.

Tercero.-Devolver las garantías prestadas para responder del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Ley 21/1974, de 27 de junio, y del Real Decreto de otorgamiento de los permisos y de la Orden de 31 de mayo de 1988 por la que se concedió la primera prórroga.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de octubre de 1991.-El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, P. D. (Orden de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Mariano Casado González.

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

26419 RESOLUCION de 31 de mayo de 1991, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 2.013/1987, promovido por «CFEB Sisley, Societe Anonyme», contra acuerdos del Registro de 20 de mayo de 1985 y 23 de abril de 1987. Expediente de marca número 1.068.219.

En el recurso contencioso-administrativo número 2.013/1987, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «CFEB Sisley, Societe Anonyme», contra resoluciones de este Registro de 20 de mayo de 1985 y 23 de abril de 1987, se ha dictado, con fecha 12 de septiembre de 1990, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el Procurador don Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de «CFEB Sisley, Societe Anonyme», contra la resolución del RPI de fecha 20 de mayo de 1985, confirmada en reposición por resolución de fecha 23 de abril de 1987, debemos declarar y declaramos la conformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico, confirmando en consecuencia. Sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de mayo de 1991.-El Director general, Julio Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

26420 RESOLUCION de 31 de mayo de 1991, del Registro de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarada firme, en el recurso contencioso-administrativo número 660/1986, promovido por doña Cristina Pouget de Sorela, contra acuerdos del Registro de 9 y 11 de noviembre de 1985.

En el recurso contencioso-administrativo número 660/1986, interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por doña Cristina Pouget de Sorela, contra Resoluciones de este Registro de 9 y 11 de noviembre de 1985, se ha dictado, con fecha 5 de octubre de 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia, declarada firme cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de doña Cristina Pouget de Sorela contra las Resoluciones de 9 y 11 de noviembre de 1985 del Registro de la Propiedad Industrial por las que se estimaron los recursos interpuestos, respectivamente, por «Rolls-Royce Limited» y «Puente Romano, Sociedad Anónima», contra el acuerdo de concesión de la marca número 1.027.547 a favor del actor, por ser dichas resoluciones en los extremos examinados, conformes a derecho; y todo ello sin hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes procesales.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se